



Red Econolatin

www.econolatin.com

Expertos Económicos de Universidades Latinoamericanas

Nota prospectiva de Econolatin, número 6



Universidad de Nariño

Luis Hernando Portillo Riascos

Departamento de Economía
Grupo de Investigación Coyuntura
Económica y Social
Universidad de Nariño

El trasfondo de las protestas en Colombia

San Juan de Pasto, 26 de febrero de 2020

SITUACIÓN ACTUAL

Las manifestaciones del 21 de noviembre de 2019 han sido un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de Colombia, sin que previamente se hubiera dimensionado la magnitud que al final tomaron, ni siquiera por parte de sus principales promotores.

Los diversos actores¹ han tenido en común la decisión de levantar su voz de protesta para reivindicar muchas de sus aspiraciones en el frente social, económico, ambiental, político etc., muchas de las cuales ya venían del pasado como las de indígenas² y estudiantes universitarios³. Si bien estos movimientos se han dado en otros países, en el caso de Colombia hay que señalar algunas peculiaridades.

Por lo observado hasta el momento, dicho fenómeno ya representa un cambio trascendental para Colombia. En este punto, como se planteará más adelante, es importante tener en cuenta que las manifestaciones se originan tanto por factores estructurales como por varios elementos coyunturales. Por tanto, dado que muchos de los problemas que están en la raíz del estallido social no se pueden resolver en el corto plazo, ni tampoco hay la disposición para hacerlo por parte de las élites políticas, en las que se incluye al Gobierno Nacional, todo apunta a que

¹ Estudiantes universitarios, sindicatos, campesinos, artistas, indígenas, activistas de derechos humanos, defensores del medio ambiente, animalistas, y grupos significativos de la sociedad civil en general, y particularmente los jóvenes.

² Durante los meses de marzo y abril de 2019, los indígenas del departamento del Cauca se movilizaron para presentar una serie de reclamaciones ante el Gobierno Nacional, en lo que denominaron como la "Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz".

³ Las protestas organizadas por los estudiantes universitarios han sido recurrentes, no obstante, una de las más importantes en los últimos años se dio entre los meses de octubre y diciembre del año 2018.

las consecuencias más importantes estarán en el mediano y largo plazo.

En este contexto, todo dependerá del papel y la convicción que asuma la ciudadanía en dicho proceso, destacando fundamentalmente el rol que quiera jugar la población joven.

¿QUÉ HA PASADO DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019?

La convocatoria a la huelga del 21 de noviembre de 2019 fue realizada por el Comité Nacional del Paro, conformado por alrededor de sesenta organizaciones sociales. Las protestas fueron, en su mayoría, pacíficas, y se caracterizaron tanto por la pluralidad de los manifestantes como por la diversidad de sus expresiones. Y si bien es cierto se presentaron varios episodios de violencia, este no fue el carácter que asumieron los manifestantes en su conjunto.

Durante los primeros días de movilizaciones se creó un ambiente de pánico entre la población, y en muchas ciudades, incluidas Cali y Bogotá, se declaró el toque de queda⁴, que en su momento se justificó por parte de las autoridades locales debido a las amenazas de saqueo y la incertidumbre generada a partir de la información transmitida por la prensa y las redes sociales. No obstante, las amenazas nunca se concretaron, y quedó la idea de que había una estrategia deliberada para estigmatizar la protesta social, creciendo el número de manifestantes tanto en cantidad como en pluralidad.

El ambiente de protesta tuvo su punto álgido durante las tres semanas siguientes al 21 de noviembre y se fue reduciendo hacia mediados del mes de diciembre.

En el año 2020, las organizaciones sociales retomaron nuevamente las protestas, con una primera manifestación el día 21 de enero y otra importante convocatoria para el próximo 25 de marzo de 2020.

Como una medida para atender los reclamos de los manifestantes, se creó la denominada Gran Conversación Nacional, que es el espacio institucional establecido por el Gobierno Nacional para dialogar con los grupos de manifestantes, y particularmente con el Comité Nacional del Paro⁵. Dicha discusión, en principio, se esperaba que gire alrededor de los trece puntos señalados por el Comité Nacional del Paro al inicio de las manifestaciones del mes de noviembre. No obstante, los esfuerzos no parecen estar teniendo éxito, en tanto que los representantes de las organizaciones sociales están dando a entender que el Gobierno no ha sido capaz de ofrecer una salida a sus peticiones, mientras que este afirma que muchos de los aspectos que están incluidos en los 104 puntos entregados el 13 de diciembre de 2019 no es posible discutirlos

⁴ Es una medida consignada en los artículos 39 y 99 del decreto 1355 de 1972, que pueden tomar los alcaldes de los municipios para preservar el orden público.

⁵ En paralelo, el Gobierno Nacional han venido realizado algunos talleres regionales, que tienen por objeto recoger las inquietudes de las de los diferentes grupos sociales. <https://www.conversacionnacional.gov.co/#agenda>

en el marco de la Conversación Nacional, porque van más allá de lo que se podría hablar en el contexto de las protestas.

ENTENDIENDO LAS PROTESTAS

No hay una agenda estructurada y muchas de las reclamaciones han venido surgiendo de forma espontánea, incluso dándose contradicciones.

Ahora bien, entendiendo que las razones para protestar son válidas, y que muchas de las mismas son de tipo estructural, lo que se puede afirmar es que se dieron varias circunstancias que propiciaron que la manifestación que inició el 21 de noviembre tomara unas dimensiones que inicialmente no estaban previstas.

En primer lugar, tanto en los días previos al 21 de noviembre como en los días posteriores al inicio de las manifestaciones, lo que hizo el gobierno de Iván Duque fue tratar de estigmatizar la protesta, señalando que había unos objetivos políticos detrás de las huelgas, y que los partidos de oposición querían capitalizar sus resultados.

En segundo lugar, el Gobierno empezó a señalar que existía cierta alineación del paro organizado en Colombia con movimientos globales, como el Foro de São Paulo, que buscaban favorecer los intereses políticos de los partidos de izquierda en países como Venezuela, Brasil, e incluso Rusia.

En tercer lugar, se creó un ambiente hostil hacia los grupos que estaban detrás de las protestas. Así pues, en los días previos a las marchas del 21 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación efectuó varios operativos que estaban dirigidos a detener las actividades que estaban desarrollando dichos grupos, entre los que se cuentan, también, algunos medios de comunicación alternativos. El despliegue militar que se realizó en varias ciudades del país fue bastante amplio, con pocos antecedentes en la historia reciente de Colombia. Así entonces, desde un inicio, las huelgas tomaron unas dimensiones que inicialmente no se habían previsto, y fue el Gobierno Nacional uno de los principales actores que permitió llegar hasta tal punto. La actitud asumida por las Fuerzas Militares y los cuerpos de seguridad e investigación, inicialmente, generaron una especie de temor en la sociedad. No obstante, al final, la terminó impulsando para seguir participando en las manifestaciones.

En cuarto lugar, el gobierno de Duque venía trabajando en varios proyectos para ser presentados frente al poder legislativo en el denominado *paquetazo*, que albergaba medidas muy cuestionadas como la Ley de Crecimiento Económico (Ley de reforma tributaria), la reforma laboral, cuya idea fundamental gira alrededor de la posibilidad de contratación por horas y un salario diferenciado para los jóvenes; la reforma pensional, que debilita al sistema público frente al privado, y que introduce la probable modificación tanto de la edad de pensión como del tiempo necesario para acceder al derecho a la misma; el

llamado *holding* financiero, que es una figura a través de la cual se agrupan a las empresas públicas del país, lo cual haría que se unifique la gestión de las mismas. A pesar de que el Gobierno negó que tales propuestas serían presentadas, algunos congresistas afines al Gobierno Nacional y los miembros del gabinete han hablado ampliamente acerca de estos temas.

El contexto político

Las manifestaciones convocadas para el 21 de noviembre tuvieron lugar en un contexto de baja popularidad del presidente, Iván Duque. Dicho fenómeno no es gratuito, y tiene que ver con varias circunstancias que han deteriorado tanto la confianza entre la sociedad como su capacidad de gobernabilidad.

Cuando inició su mandato, Duque no tenía garantizadas las mayorías en el Congreso de la República, aunque gozaba del apoyo de su partido, el Centro Democrático, y particularmente de su líder, el expresidente Álvaro Uribe Vélez⁶, pero esto no le garantizaba cumplir con ciertas promesas realizadas durante su campaña presidencial. En este contexto, varios de los proyectos legislativos que se presentaron ante el Congreso de la República tanto en el año 2018 como en 2019 finalmente no fueron aprobados.

La baja gobernabilidad de Iván Duque se debe enmarcar en el ambiente de polarización política que vive Colombia durante los últimos años, avivado si cabe más por el plebiscito convocado por el presidente Juan Manuel Santos en 2016 para someter a consideración de la ciudadanía el Acuerdo de Paz que se había firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que como es conocido resultó negativo, con un margen muy estrecho. Tanto Álvaro Uribe como de Iván Duque (del Centro Democrático) defendieron esta posición ganadora, y aunque finalmente el Acuerdo de Paz con las FARC fue ratificado por el Congreso de la República, la polémica alrededor de este tema continuó.

En las elecciones presidenciales de 2018, Iván Duque fue el ganador, pero su opositor, Gustavo Petro (izquierdista y exalcalde de Bogotá), obtuvo una cifra de votantes muy importante (alrededor de ocho millones de votos, lo que representa el 41.83% del total). Esta polarización no ha sido completamente entendida por el presidente, quien decidió continuar con su agenda.

Los resultados de las elecciones de autoridades locales realizadas el 27 de octubre del año 2019 también marcaron un punto muy importante en el contexto de las protestas. El Centro Democrático no ganó las elecciones en ninguna de las ciudades que se consideran medulares en la política colombiana (Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín).

⁶ Fue presidente de Colombia durante el periodo 2002-2010. Desde el año 2014, viene ocupando una curul como Senador de la República.

Los resultados electorales muestran un mensaje muy claro a los partidos tradicionales: cansancio ante el continuismo, las prácticas clientelistas y el alejamiento de las élites políticas con relación a los reclamos que hace la sociedad.

Otros de los aspectos que han generado amplia división en la opinión de los colombianos es la posición de Iván Duque frente a la crisis en Venezuela, quien ha mostrado su desavenencia con la administración de Nicolás Maduro, buscando el protagonismo frente al escenario de salida de Maduro del poder, lo que ha incrementado la hostilidad entre los dos gobiernos. Además, creó la idea entre la ciudadanía de que se estaba dando prioridad a un problema externo, descuidando así los problemas propios de los colombianos.

Por último, uno de los hechos que incidieron notablemente en las protestas del mes de noviembre fue el llamado del Congreso de la República a un debate de control político al Ministro de Defensa de este entonces, Guillermo Botero, cuestionado por un operativo realizado por parte de las Fuerzas Militares el día 30 de agosto de 2019 en un campamento guerrillero ubicado en el departamento del Caquetá, donde habrían muerto al menos 8 niños. Finalmente, Botero terminó renunciando a su cargo, soportando una fuerte presión social en un país donde permanecen las secuelas de un conflicto armado que ha dejado miles de muertos.

El contexto social

La dinámica social también es muy importante para explicar el estallido de las protestas en Colombia.

En primer lugar, se ha dado un incremento de las hostilidades hacia los líderes sociales que se puede calificar de sistemático⁷, poniéndose en evidencia con las protestas de noviembre. Incluso, se ha advertido un cierto reforzamiento del paramilitarismo, sin que haya sido frenado por el gobierno.

En segundo lugar, el descontento también deriva de la preocupación por parte de muchos ciudadanos y organizaciones civiles quienes dudan de la posición del gobierno de Duque y su partido, el Centro Democrático, frente a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. No existe la disposición por parte del Gobierno Nacional para emprender las iniciativas que permitan garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, no se evidencian iniciativas a gran escala para atender las zonas afectadas históricamente por el conflicto, en las cuales, además se está dando

⁷ De acuerdo con el *Informe sobre violencia política* publicado el 30 de enero de 2020 por la Misión de Observación Electoral (MOE), “desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, la MOE registró 549 líderes políticos, sociales y comunales víctimas de violencia a nivel nacional. De estos, 125 (23%) fueron asesinados”. Esto quiere decir que cada tres días fue asesinado un líder social. En el año 2020, según esta publicación, 19 líderes sociales, comunales y políticos han sido reportados como asesinados. Dicha cifra muestra un incremento frente a los 16 asesinatos reportados en el año 2019, 18 en el año 2018, 2 en 2017, y 5 en 2016.

un recrudecimiento de la violencia y la presencia de diferentes grupos armados, en ausencia del Estado. Tampoco se emprenden las reformas prometidas. Además, hay varias medidas tendientes a tratar de fortalecer la gran minería, precisamente en muchas zonas de posconflicto.

En el marco descrito, lo que ha hecho Iván Duque es buscar revivir la política de Seguridad Democrática implementada por Álvaro Uribe en el año 2002, sin entender que el contexto de Colombia es completamente diferente. El problema es que estas medidas han supuesto el incremento y persecución hacia los líderes sociales, e incluso de muchos de los desmovilizados de las FARC. Al final, estas también serían algunas de las razones por las cuales varios de los exguerrilleros que habían decidido hacer parte del proceso de paz, nuevamente retomaran las armas, sembrando las dudas sobre la capacidad del Estado y del Gobierno para cumplir con sus compromisos.

El contexto económico

Históricamente, a Colombia se lo ha calificado como un país de relativa estabilidad macroeconómica, con tan solo tres episodios de caída del PIB durante los últimos cien años (1930, 1931 y 1999) y con ausencia de episodios de hiperinflación, crisis cambiarias de gran envergadura, o cese de pagos (*default*).

Desde mediados de la década de los 2000, la economía colombiana se benefició del *boom* de los precios de los productos mineros y los hidrocarburos. Empero, una vez se acabó al impulso externo, la economía nuevamente volvió a desacelerarse⁸. Pese al éxito económico, este es insuficiente para enfrentar muchos de los problemas estructurales que enfrenta este país, tales como el desempleo⁹, la informalidad laboral¹⁰, la desigualdad, la pobreza¹¹ etc. Además, dado que los *shocks* externos positivos, que son los que marcan la dinámica macroeconómica de este país, no se vislumbra que aparezcan en el corto plazo, es muy poco probable que este país vuelva a un escenario de alto crecimiento de su economía.

Un momento histórico para Colombia

No se puede entender la Colombia actual desconociendo los más de cincuenta años de conflicto con las FARC y otros grupos armados. A

⁸ En el periodo 2015-2019, la tasa de crecimiento económico promedio anual fue del 2.45%; es decir, la mitad de la alcanzada entre 2004 y 2014.

⁹ Para el 2019, la tasa de desempleo fue 10,5%, lo que representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al año 2018 (9,7%). <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>

¹⁰ Durante el año 2019, la informalidad laboral alcanzó una tasa del 46% promedio anual.

¹¹ El índice de Gini de Colombia pasó de 0.56 en 2010 a 0.517 en 2018. En el mismo periodo, la pobreza monetaria se redujo del 37.2% al 27%, y la pobreza monetaria extrema pasó del 12.3% al 7.3%. A pesar de estos avances, el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso continúa siendo muy alto. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida>

finales de 2018, según la OIM (2019)¹², Colombia seguía teniendo más de 5,7 millones de desplazados internos (la segunda cifra más alta del mundo). En el año 2017¹³, el Gobierno Nacional entregó un balance del conflicto armado que resume así: 8.074.272 víctimas, 7.134.646 casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros, entre otros hechos.

Durante los años que duró el conflicto armado con las FARC, el principal problema para Colombia fue la guerra, a tal punto que este fenómeno marcó la agenda política de este país durante muchos años. Este contexto dio como resultado que, desde finales de los noventa, las elecciones presidenciales fueran ganadas por los partidos de derecha; aclarando que nunca en la historia de Colombia ha gobernado un partido de izquierda.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el 24 de noviembre de 2016, el panorama político-institucional colombiano se modificó sustancialmente. Hay dos consecuencias de este fenómeno. En primer lugar, la agenda de los colombianos, que durante muchos años había estado en torno a la guerra, pasó a mostrar cambios significativos cuando aparecen reclamos en otros aspectos que habían estado relegados (la educación, la salud, el medio ambiente, la corrupción, entre otros). Y además la ciudadanía se da cuenta que pueden salir a reclamar por sus reivindicaciones. En segundo lugar, una vez se firma el Acuerdo de Paz, los partícipes de las movilizaciones sienten que ya no se los va a estigmatizar por hacer parte de este tipo de manifestaciones, tal y como había sucedido en otros momentos de la historia del país, cuando se los relacionaba con los grupos subversivos.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

La forma como el gobierno de Duque afrontó la movilización del 21 de noviembre estuvo equivocada. En primer lugar, porque antes de que las manifestaciones se dieran, se había creado un ambiente hostil hacia quienes protestaban.

En segundo lugar, la respuesta por parte de la fuerza pública frente a los desmanes que se dieron en el marco de las protestas se consideró como desproporcionada¹⁴. Así pues, el balance de las protestas de finales de noviembre e inicios de diciembre fue de aproximadamente cuatro muertos entre civiles y militares, alrededor de 200 detenidos y medio millar de heridos.

En tercer lugar, el Gobierno se concretó en criticar los desmanes que se presentaron durante las movilizaciones, sin abordar de manera

¹² Organización Internacional para las Migraciones (2019). *Informe sobre las migraciones en el mundo 2020*. Ginebra, ONU, OIM.

¹³ <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/el-numero-de-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia-504833>. Consultado el 25 de febrero de 2019.

¹⁴ En este punto, uno de los hechos más importantes fue la muerte de Dilan Cruz, un joven de 18 años que resultó impactado por un artefacto lanzado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en el marco de las movilizaciones realizadas el día 23 de noviembre en Bogotá.

efectiva los reclamos de los ciudadanos. Además, nunca ofreció una agenda clara para enfrentar dicho fenómeno, y solamente después de varios días de movilizaciones se pudo dar un acercamiento con las personas que estaban liderando las protestas, a través de la denominada Gran Conversación Nacional, en el cual confluían diversos sectores de la sociedad, incluso los que no estaban protestando. Dicha propuesta no fue bien recibida por los líderes de las protestas, quienes reclamaron un espacio propio para dicho ejercicio.

Los diálogos entre los manifestantes y el Gobierno Nacional no iniciaron con la agilidad requerida. En principio, porque las mismas organizaciones que estaban protestando no tenían claridad sobre los temas específicos que se incluirían en el documento que se iba a presentar ante el Gobierno Nacional, el cual exigió que se concreten dichas solicitudes para así poderlas abordar. El 13 de diciembre de 2019 fue presentado el pliego de peticiones que incluye 104 puntos¹⁵, que posteriormente se ampliaron a 130, distribuidos en trece ejes temáticos.

Una segunda lectura de la estrategia asumida por el Gobierno Nacional es que se quiso dilatar la protesta, aprovechando para ello la falta de claridad en algunos de los reclamos de quienes estaban protestando. Dicho fenómeno efectivamente se dio, teniendo en cuenta que llegaba el fin de año y la capacidad de convocatoria poco a poco se fue reduciendo.

En su afán por ofrecer alternativas transitorias frente a la protesta ciudadana, Duque incorporó algunas medidas en el proyecto de la llamada Ley de Crecimiento Económico, discutido por el Congreso a finales del mes de diciembre de 2019. Entre las iniciativas aprobadas se encuentra la devolución del IVA a las familias de estratos bajos, los incentivos para la contratación de personas menores de 28 años, la eliminación del cobro del IVA durante tres días en el año, la reducción gradual de los aportes a salud que hacen los pensionados con ingresos de hasta 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Ahora bien, a pesar de que dichas medidas se pueden considerar como positivas, en dicho proyecto también se aprobaron algunas de las iniciativas que se habían cuestionado durante las protestas, siendo unas de las más polémicas las exenciones tributarias que benefician a las grandes empresas.

PERSPECTIVAS

No hay total claridad en el rumbo que tomarán las protestas. Empero, hay consenso en que la población va a seguir protestando porque las razones que generan las manifestaciones están vigentes. Además, dado que muchos de los problemas son estructurales, y que además no se está discutiendo sobre los mismos, es claro que no se van a resolver en el corto plazo. Además, hay cierto grado de consenso en

¹⁵ <https://drive.google.com/file/d/14vCkK1297zJZywJk1mcSLNmUzuupUoqy/view>.

que el Gobierno Nacional no tiene una disposición real a dialogar con los grupos que están protestando. Por otra parte, la ciudadanía tampoco confía en que los gobernantes y la clase política en general quieran emprender unas reformas de tal magnitud, dejando la duda de que el Gobierno vaya a cumplir con los compromisos que en un momento dado se adquieran, si es que esto sucede.

Un aspecto que llama la atención es que en medio de unas protestas tan concurridas haya una falta de liderazgo en el seno de los manifestantes. Si bien es cierto que algunos catalogan este hecho como algo positivo, dicho fenómeno representa un problema en la medida que va a ser difícil construir un escenario claro de negociación. En su momento, lo que va a reclamar el Gobierno es que haya unos interlocutores perfectamente definidos, cosa que a día de hoy no existen. Esta situación, desde luego, va a ir en contra de las aspiraciones de los manifestantes.

Por otra parte, una de las decisiones políticas tomó Iván Duque a principios del mes de febrero de 2020 tiene que ver con los cambios ministeriales en las carteras de Salud y Trabajo. Para algunos analistas, esto representa la entrada al Gobierno de los partidos políticos tradicionales como el Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U. Se entiende que dicha decisión tiene como propósito aumentar la gobernabilidad del Gobierno Nacional en el Congreso de la República, de tal manera que se puedan sacar adelante varias de las iniciativas que han estado pendientes desde la llegada a la presidencia de Iván Duque en el año 2018; incluso aquellas por las cuales se vienen adelantando las protestas.

La participación que empiezan a tener los partidos políticos en el gabinete presidencial deja entrever que el Gobierno Nacional ha cambiado su agenda, lo que implica ceder ante las pretensiones de los partidos políticos que lo que buscan es representación burocrática, algo que en la campaña presidencial se había criticado tajantemente por parte de Iván Duque. Para los grupos de protesta, las decisiones del Gobierno siguen reflejando el distanciamiento entre los intereses de las élites políticas y los de la ciudadanía; algo que naturalmente puede incidir en el rumbo que tome la protesta social en el año 2020.

También se necesita conocer si habrá un cambio de posición del Gobierno con relación al Acuerdo de Paz. A finales del mes de enero de 2020, la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, calificó el proceso de paz con las FARC como semifallido, y que esto había ocurrido por los incumplimientos de los exguerrilleros. Aunque algunos analistas han entendido esta declaración como un nuevo golpe frente al Acuerdo de Paz, lo cierto es que en muchas zonas del país el Estado no llegó como se esperaba. Ante esta situación, han proliferado actividades de narcotráfico, extorsión y la minería ilegal, especialmente en la costa pacífica colombiana y en la frontera con Venezuela.

Lo que se está viendo es que el Gobierno, y el Estado en general, están dejando pasar la posibilidad de iniciar un verdadero plan de posconflicto. Las economías ilegales están ganando esta batalla, no en todos los lugares, pero sí en una vasta región de este país. El paro armado convocado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante los días 14 al 16 de febrero de 2020 es la muestra de que el conflicto está lejos de terminar; y más cuando el Gobierno Nacional no ha mostrado la disposición de retomar los diálogos de paz con este grupo guerrillero. Así pues, resulta un tanto paradójico que haya llegado un gobierno cuya bandera era combatir la inseguridad, y la percepción de la sociedad luego de 18 meses de mandato es que la misma se ha deteriorado en vez de mejorar.

Otra interrogante tiene que ver con el papel que va a asumir los partidos políticos de oposición al Gobierno. En este punto, es importante señalar que, si bien es cierto dichos partidos han apoyado las protestas sociales, no son los que las están liderando, y por tanto no hay claridad en que si estos terminarán o no capitalizando los resultados de estas manifestaciones. Lo claro es que las mismas van a tener una repercusión en las elecciones presidenciales del año 2022. De hecho, algunos políticos ya lanzaron prematuramente sus precandidaturas presidenciales¹⁶, lo cual se debe entender en el contexto del estallido social que se dio en el país desde el mes de noviembre de 2019.

Ahora bien, frente al escenario político que se espera luego de las manifestaciones, especialmente en el caso de las elecciones presidenciales de 2022, todavía existen muchas dudas. Habrá que ver si verdaderamente se está dando una transformación ciudadana en Colombia. Así entonces, resta esperar sí efectivamente se va a dar un cambio o el estallido social solamente fue un hecho de momento que terminó apagándose. Las dudas están precisamente en el rol que asuma la población joven, que es la que más reclama, pero que a la vez no está dispuesta a participar en los espacios democráticos; precisamente por la desconfianza que tiene en los mismos.

CONCLUSIONES

Las manifestaciones convocadas en Colombia desde el 21 de noviembre de 2019 tienen una trascendencia fundamental para este país. En este punto, se destaca el papel que ha asumido la clase media y los jóvenes, no solamente por sus reclamos sino también por las formas de manifestar su desencanto con las élites que han gobernado el país, y la desconfianza frente a la posibilidad de que las mismas sean capaces de afrontar, entender y solucionar sus demandas. Las preocupaciones de los jóvenes pasan por muchos temas, entre los que se destacan aspectos como la dificultad para el acceso a la educación

¹⁶ El actual senador Jorge Robledo y el ex candidato a la presidencia Sergio Fajardo ya se han manifestado sobre este aspecto.

superior, el desempleo juvenil o las posibilidades de recibir hacia el futuro una pensión de jubilación.

Detrás de las reclamaciones están una serie de aspectos que hacen parte de una problemática estructural que no va a ser fácil de resolver en el corto plazo. No obstante, lo más importante es resaltar la disposición de la ciudadanía para salir a reclamar y discutir sobre muchos de los aspectos que durante mucho tiempo estuvieron relegados. Así entonces, el momento histórico por el que pasa Colombia es digno de remarcar, y más si se tiene en cuenta que, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, se abre la puerta a nuevos espacios de debate entre la sociedad y las élites políticas.

El papel de los jóvenes en el marco de las protestas resulta muy llamativo, dado que diversos estudios de confianza y opinión muestran el deterioro en instituciones tradicionales de la democracia. Pese al ambiente de optimismo ante las protestas, todo dependerá de la forma en que se capitalicen los resultados de las manifestaciones y si esto verdaderamente conduce a una transformación democrática.

Por lo visto hasta el momento, los partidos políticos tradicionales tienen una apuesta por el continuismo, dejando entrever que, por ahora, los cambios no se van a realizar. Y aunque dicha apuesta puede representar un riesgo, no se observa hasta el momento que se vayan a emprender transformaciones de gran envergadura.

Las opiniones vertidas en este informe son responsabilidad del equipo técnico que elabora el informe y pueden no reflejar el criterio individual de las instituciones que integran el CESLA.